

IMPACTO SOCIAL DEL NARCOTRÁFICO¹

JORGE HERNANDEZ LARA²
NEFTALÍ TELLEZ ARIZA

El impacto del narcotráfico sobre la sociedad regional ha sido profundo y será duradero, una muestra de ello es el proceso de recomposición de la trama social a que ha dado lugar con la conformación de nuevas fracciones de las clases superiores y el reacomodo de las capas medias urbanas en las ciudades grandes e intermedias. Dicho impacto es igualmente evidente si se observa el transcurso que han tenido durante los últimos años la cultura, la política y la vida social de los Valle-Caucanos, tal como intentamos demostrarlo en este capítulo.

Multiplicación de Conflictos³

Desde cuando el narcotráfico apareció en la región Valle-Caucana se han agudizado los conflictos sociales que existían desde antes y han surgido otros nuevos. Siempre, durante el periodo de quince años que aquí tomamos en cuenta se ha tenido noticia de enfrentamientos internos entre grupos de narcotraficantes. A partir de 1973 y durante casi cinco años hubo una época de guerra interna en la cual cayeron algunas personas que, según dice, habrían podido convertirse en cabezas visibles del negocio, de haber seguido viviendo; y, luego, a partir de 1980 los ajustes de cuentas entre grupos dedicados al procesamiento y tráfico de drogas ilegales en esta región se volvió común, dando origen en no pocos casos a masacres colectivas.

La dinámica regional de agudización de los conflictos ha estado ligada muy estrechamente a la dinámica nacional de las confrontaciones durante algunas etapas,

¹ Tomado de: “Aproximaciones al Estudio sobre el Impacto del Narcotráfico en la Región Valle-Caucana”, Jorge Hernández Lara y Neftaly Tellez Ariza. Cali, Abril de 1992. pp. 95-113

² Jorge Hernández, Profesor Titular Departamento de Ciencias Sociales; Neftalí Tellez Ariza, Profesor Titular Departamento de Economía.

³ En esta sección también se sintetiza información de prensa aparecida en diarios regionales en 1975, 1980, 1985 y 1990.

como aquella que siguió a la firma del tratado de extradición y la ofensiva general que se desató por parte de los gobiernos colombiano y estadounidense contra el narcotráfico en 1979, durante la cual operó una especie de red nacional de grupos dedicados a esa actividad de la cual hicieron parte hasta mediados de la década siguiente los principales grupos Valle-Caucanos.

Cuando en noviembre de 1981 un comando del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de conocidos traficantes de drogas ilegales, estos reaccionaron inmediatamente y con el concurso de prácticamente todos los grupos de narcotraficantes colombianos conformaron, el MAS, Movimiento Muerte a Secuestradores, cuya creación fue anunciada públicamente el 2 de diciembre de manera espectacular mediante el sobrevuelo de una avioneta que dejó caer sobre el estadio de Cali miles de volantes, en momentos en que se jugaba un clásico entre los equipos Nacional de Medellín y Deportivo América de Cali. Según se ha dicho el MAS alcanzó a sembrar el pánico en las filas del M-19 al asesinar a más de cien de sus militantes en tan sólo seis semanas, a comienzos de 1982, hasta cuando apareció de nuevo la secuestrada el 17 de febrero.⁴

Pero 1984 parece haber sido un año clave en la historia del narcotráfico en Colombia, por varios motivos entre los cuales se destaca la división de opiniones que se comenzó a presentar entre distintos grupos en torno a la manera de enfrentar la arremetida conjunta de los gobiernos estadounidense y colombiano: mientras unos optaron por una confrontación armada en gran escala que desembocó en lo que se ha denominado el narcoterrorismo, otros decidieron enfrentar la política estatal principalmente a través de causas legales y jurídicos. Esa diferencia de opciones llevó a la división de la red nacional que se había tejido para coordinar las acciones de los principales grupos dedicados al tráfico de drogas ilegales y, posteriormente a la llamada guerra de carteles.

En la nueva situación de confrontación creada a partir de los sucesos de 1984 los principales grupos de narcotraficantes colombianos, con excepción de los miembros del llamado cartel de Cali, se alinearon bajo la conducción de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, para llevar a cabo una guerra contra el tratado de extradición y por lograr que la policía y otros organismos de seguridad del Estado respetaran los derechos humanos de las personas sospechosas de pertenecer a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Esta guerra se fue convirtiendo progresivamente en una confrontación política, hasta terminar con la expedición de los decretos 2047, 3030 y 303 de 1990, así como la prohibición de la extradición que hizo la asamblea constituyente en 1991, lo cual facilitó la entrega de los sobrevivientes notables y varios de sus colaboradores. Fue una guerra cruenta en la cual las armas preferidas de los narcoterroristas fueron la ejecución de magnicidios, de los cuales hubo por lo menos una docena atribuible directamente a ellos, y la colocación de explosivos en lugares públicos.

Mientras los demás llevaban a cabo la guerra mencionada, los miembros de los grupos dedicados al tráfico de drogas ilegales con asiento en la región valle-caucana,

⁴ Semana, No 466, Bogotá, p. 19

plantearon y ganaron algunas batallas jurídicas como la que dejó libre a Gilberto Rodríguez Orejuela en 1987 después de tres años de prisión, continuaron con el propósito de conquistar el mercado europeo y dieron forma de empresa a su organización ilegal, aunque se vieron también involucrados en una confrontación, violenta con el llamado Cartel de Medellín. De esta otra guerra hacen parte cuarenta atentados cometidos contra distintas sucursales de Drogas La Rebaja y diez más contra emisoras del Grupo Radial Colombiano, el incendio de varios centros comerciales en Cali, la colocación de una bomba contra el Edificio Mónaco en Medellín, el asesinato de muchas personas de uno y otro bando, fuera de varios planes fallidos a través de los cuales los jefes intentaron liquidarse físicamente unos a otros, a partir de 1986.

Los niveles de violencia asociada al narcotráfico o realizada de acuerdo con los códigos éticos que éste difundió en el conjunto de la sociedad aumentaron progresivamente hasta alcanzar su pico más alto hacia el final de la década.⁵ Y según la información consultada, durante los últimos tres o cuatro años ha habido mucha violencia asociada a las actividades de los narcotraficantes en la región valle-caucana, han sido años de masacres, desapariciones, secuestros y asesinatos, cuyas víctimas principales han sido campesinos, jornaleros e indígenas. Aunque algunos de estos hechos violentos se han producido como consecuencia del ajuste de cuentas entre miembros de las organizaciones ilegales, los casos más dramáticos y espeluznantes tienen su origen en el hecho de que algunos de los narcotraficantes más poderosos se han venido convirtiendo en Nuevos Terratenientes y en su afán por acumular tierra y establecer su dominación se han encontrado con la resistencia campesina e indígena.

Tenemos, pues, que con el narcotráfico surgen y se agudizan conflictos de distinto tipo con repercusiones sobre la sociedad regional: hay conflictos violentos de corto plazo como los que oponen a los narcotraficantes y al M-19 entre noviembre de 1981 y febrero de 1982, a los narcotraficantes y el gobierno colombiano entre 1979 y 1984, a los narcotraficantes valle-caucanos y a los del llamado cartel de Medellín entre 1986 y la actualidad. Hay conflictos intermitentes y violentos como los que oponen a los narcotraficantes y las instituciones encargadas de la justicia, a grupos de narcotraficantes entre sí, a los narcotraficantes y las comunidades campesinas e indígenas. Hay conflictos no violentos entre narcotraficantes y grupos tradicionales de poder local y, finalmente, hay conflictos latentes entre grupos vinculados al narcotráfico y grupos de ciudadanos que se sienten lesionados por aquellos en la vida cotidiana.

Veamos ahora con mayor detalle algunos procesos sobre los cuales el impacto social del narcotráfico en la región ha sido más resonante y en torno a los cuales se han presentado la mayoría de los conflictos señalados.

⁵ CAMACHO, Alvaro y GUZMAN, Alvaro. Colombia: Ciudad y Violencia, Bogotá, Ed. Foro Nacional, 1990, pp. 67-180

Las Nuevas Relaciones en el Campo

Por diversas circunstancias que tienen que ver entre otras cosas con su origen social y con la necesidad de hacer inversiones seguras, los narcotraficantes han comprado cerca de un millón y medio de hectáreas en todo el país durante los últimos quince años y lo continúan haciendo hoy día; es decir, han tendido a convertirse en los nuevos terratenientes colombianos y esto implica una modificación sustancial de la vida rural en aquellas zonas en las cuales el proceso ha sido más acelerado.

Para el caso de la región Valle-Caucana hay zonas del norte del Valle, el norte del Cauca, el Valle del Patía, la Bota Caucana y el borde de la carretera panamericana, en las cuales es evidente la incursión de estos nuevos propietarios. Según declaraciones del gerente general del INCORA durante 1991 los propietarios tradicionales del Cauca ofrecieron en venta a ese instituto - considerado hasta ahora el mejor postor-, mil fincas equivalentes a unas 30.000 hectáreas, muchas de las cuales han ido a parar poco a poco a manos de narcotraficantes que ofrecen tres o cuatro veces el valor esperado por los propietarios tradicionales, desbordando completamente las posibilidades del INCORA. Se trata de una verdadera contra-reforma agraria, como se ha afirmado varias veces.

Se ha dicho que esta compra masiva de tierras sirve para el lavado de dólares y para el montaje de los pequeños laboratorios rotativos que utilizan en el procesamiento de la cocaína y los derivados de la amapola; pero, también es cierto que en muchas de esas propiedades se emprenden proyectos productivos agrícolas o pecuarios y se establecen sitios de recreo o descanso para sus propietarios y allegados, con lo cual se genera una cierta cantidad de empleo para habitantes de la región que estén dispuestos a trabajar allí.

Pero lo que caracteriza a estos nuevos propietarios no es sólo que estén en capacidad de hacer grandes inversiones económicas en tierra, ganado, tecnología y embellecimiento de sus propias haciendas, aprovechando las ventajas que les otorga el funcionamiento de una economía de libre mercado como la nuestra. Ellos echan mano de abundantes recursos extraeconómicos para consolidar su presencia allí en donde han decidido establecerse y es común que acudan a amenazas o chantajes para desplazar antiguos propietarios acomodados o al asesinato para quebrar la resistencia de campesinos pobres e indígenas. Son generadores de violencia y es por eso que se han visto comprometidos en el sostenimiento de grupos armados de carácter privado, algunos de ellos paramilitares, encargados de realizar masacres como la de Caloto a finales de 1991, en la cual asesinaron a veinte indígenas paeces. De esta masacre se acusa como autores intelectuales justamente a dos hermanos narcotraficantes que le habían comprado pocos días antes la hacienda El Nilo, escenario de la matanza, a quienes figuraban como sus propietarios tradicionales y sostenían un pleito jurídico con las comunidades indígenas, habitantes ancestrales de la zona. El proceso de concentración de tierras en manos de narcotraficantes tiene visos de expropiación forzada con indemnización

diferenciada que favorece a los propietarios tradicionales acomodados y perjudica a los campesinos minifundistas e indígenas, contra los cuales estos nuevos señores de la tierra sienten, además, tanto o mayor desprecio racista y clasista que los viejos gamonales.

Hay oportunidades en las cuales el conflicto por la tierra da paso a la confrontación en torno a las concepciones que unos y otros tienen sobre la forma en que debería organizarse la sociedad o alrededor de los estilos de vida: es cuando se pone en evidencia la abrumadora intolerancia de los narcotraficantes en su papel de Nuevos Ricos. La situación del norte del Valle sirve de ejemplo en este caso.

Según informes de prensa no desmentidos, durante los últimos tres años la violencia ha dejado un promedio de tres muertas por día en los municipios del norte del Valle y muchos de ellos son personas que primero desaparecen y luego son encontradas sin vida entre los cañaduzales, a orillas de cualquier camino o en las aguas del río Cauca, con señales de tortura y sin señas de identificación.⁶ En una de las primeras oleadas de esta violencia ejercida con servicio, utilizando sierras eléctricas como arma, llenando el vientre de las víctimas con piedras y borrando sus huellas digitales, de la cual hizo parte el asesinato del padre Tiberio de Jesús Fernández, párroco de Trujillo, resultó notable el hecho de que allí operaba una banda paramilitar organizada por narcotraficantes, compuesta por unos sesenta hombres, que tenía, el encargo de limpiar de guerrilleros, auxiliares de la guerrilla, promotores de proyectos comunitarios y sospechosos de tener coincidencias o afinidades con ella.⁷ Si bien es cierto que en esa primera oleada, hacia mediados de 1990, confluyeron hechos de violencia protagonizados por distintos bandos, entre los cuales no siempre estaban actuando los narcotraficantes,⁸ en los hechos posteriores y recientes es cada vez más evidente que la guerrilla, los militares y las fracciones políticas tradicionales se apaciguaron, pero los grupos armados al servicio de los Nuevos Hacendados no lo han hecho.

Bien sea de manera violenta, como en los casos mencionados, o de forma menos llamativa, como en otros casos, quienes han acumulado capital en el negocio del narcotráfico y luego se convierten en propietarios de grandes extensiones de tierra, buscan imponer su ley en las zonas de su influencia, sobornando o amenazando autoridades y estrechando lazos con fracciones políticas del nivel local.

Las llamadas estructuras locales de poder se han visto, pues, modificadas por la presencia de, los Nuevos Hacendados y Gamonales. En el norte del Valle, en donde se han venido fortaleciendo grupos de estos nuevos propietarios cuyas cabezas visibles son los hermanos Ivan y Fabio Urdinola, hasta tal punto que las autoridades hablan de ellos como de los cabecillas de un nuevo cartel, el cartel del norte del

⁶ Información al respecto se encuentra en: El Espectador, Bogotá, 25 de Agosto y 8 de Octubre de 1991.

⁷ Cfr: La Prensa, Bogotá, 25 de Mayo de 1990 y El Caleño, Cali, 23 de Junio de 1990

⁸ CAMACHO, Alvaro. Trujillo: un- Cruce de Caminos de Múltiples Violencias, Cali, inédito, 1991 (documento de trabajo preparado para el Taller de Coyuntura socioeconómica Valle-Caucana del CIDSE).

Valle,⁹ aunque el primero de ellos lo niega,¹⁰ hay familiares o allegados suyos que han ejercido el cargo de alcalde en algunas de las pequeñas poblaciones de esa parte del país y se ha denunciado su alianza con algunos dirigentes regionales de los partidos tradicionales. En una reunión realizada en enero de 1992 a la cual asistieron todos los alcaldes del Valle del Cauca, en la que se habló de los problemas de orden público, ninguno se refirió al narcotráfico y sus secuelas como a un problema que había que resolver en su municipio, lo cual fue interpretado por los mandos policiales presentes como una actitud excesivamente tolerante. Los miembros de varios cabildos indígenas del Cauca tienen opiniones divididas acerca de la posición que deberían asumir las comunidades frente al narcotráfico, mientras hay unos que están de acuerdo con aprovechar la posibilidad de bonanza que les brinda la siembra de amapola y la recolección del látex, hay otros que los consideran nocivo y se muestran dispuestos a colaborar con la erradicación de los cultivos, aunque unos y otros rechazan la fumigación con sustancias químicas. En las elecciones de gobernador para el cabildo de Guambía realizadas el 8 de diciembre de 1991, fue derrotado uno de los cinco candidatos de quien se dijo que estaba apoyado por narcotraficantes.¹¹

Pero la presencia local de los narcotraficantes hacendados en las relaciones de poder no se da solamente en alianza o coincidencia con fracciones políticas de los partidos tradicionales, autoridades municipales o dirigentes indígenas; también se pueden detectar sus relaciones con grupos guerrilleros, unidades del ejército, miembros de la policía y funcionarios gubernamentales, por períodos cortos, en lugares específicos y alternativamente. Esto indica que el efecto principal de esa presencia es la fragmentación de la gestión estatal y de las relaciones de poder en general.

Una Oleada de Renovación Urbana

En Cali también se menciona reiteradamente el hecho de que hay grupos liberales, en uno de los cuales tiene gran influencia algún exconstituyente, que están siendo apoyados por empresarios del narcotráfico y cosa parecida ocurre en Popayán; pero, en las ciudades más grandes el impacto social de este fenómeno se nota más en otros aspectos que en la modificación de las relaciones de poder.

La necesidad de hacer inversiones seguras que mueve a muchos narcotraficantes a comprar tierra en el campo, mueve a otras a hacer inversiones en finca raíz en las ciudades. Como se señaló en el capítulo dos, hay varias compañías legales dedicadas al negocio de finca raíz de las cuales se puede afirmar que han sido creadas por personas que acumularon capital en actividades de narcotráfico y luego lo han invertido en actividades legales. Ahora, estos nuevos empresarios de finca raíz son también constructores y en calidad de tales es que han sembrado las

⁹ El Tiempo, Bogotá, 27 de Febrero de 1992, p. 9A.

¹⁰ El País, Cali, 11 de Marzo de 1992, p. D7.

¹¹ El Tiempo, Bogotá. 22 de Diciembre de 1991, p. 1B

ciudades de altos edificios, centros comerciales y residencias lujosas que tienen su propio sello. Durante los últimos quince años Cali y otras ciudades de la región han tenido un proceso de renovación urbana inducido por los nuevos empresarios de la finca raíz, algunas de cuyas características más importantes han sido: la densificación de áreas tradicionales de los centros urbanos mediante la construcción de edificios de oficinas o apartamentos y hoteles con diez o más pisos de altura; la extensión del comercio en la modalidad de centros comerciales, en los cuales abunda la oferta de artículos importados para el consumo suntuario; la construcción y reconstrucción de residencias unifamiliares de una o dos plantas, tanto en los barrios donde viven los más ricos como en sectores de clase media, algunas de las cuales son verdaderas fortalezas, por las medidas de seguridad con que cuentan, o joyas de una arquitectura Kitsch fin de siglo XX, por el estilo y los materiales con que han sido hechas.

El parque automotor que circula por las calles y carreteras de esta zona del país, no sólo se ha incrementado notablemente sino que se ha nutrido de vehículos de lujo importados por los Nuevos Ricos. Uno de los negocios más prósperos de estos últimos años ha sido precisamente la importación de automotores lujosos, por lo cual las llamadas concesionarias de vehículos han florecido tanto como los centros comerciales. En algunos casos esas importaciones se hacen sin el lleno de todos los requisitos legales y entonces estallan escándalos - que involucran a los funcionarios de aduana, como ocurrió en 1985 con un lote de veinte camperos toyota importados por Nuevos Hacendados del norte del Valle; pero, en general lo escandaloso no es tanto que entren de contrabando, sino que rueden a altas velocidades en caravanas de dos o tres provocando accidentes y en actitudes agresivas frente a los demás conductores y peatones. La tasa de accidentalidad y el arreglo “a la brava” de los impases que produce el tráfico vehicular también se han incrementado.

El consumo ostentoso que es evidente en residencias y vehículos de los Nuevos Ricos, se nota también en otros campos como el de los restaurantes, grilles, gimnasios, planes vocacionales, colegios, vestuario, etc., a través de los cuales se ha comenzado a difundir a la manera de un nuevo estilo de vida que, entonces, otros sectores sociales adoptan como suyo, a veces en forma caricaturesca y degradada.

La Cultura Fracturada

Las ciudades se han vuelto más violentas y peligrosas. Muchas personas inocentes han muerto en el cruce de disparos que se produce cuando se enfrentan dos grupos de gente vinculada al narcotráfico por ajustes de cuentas. Con ellos se ha generalizado un código machista y retador de arreglar toda clase de problemas. Aunque no se produzcan, se vive con el temor de ser víctima de atentados y actos terroristas. La distancia entre los más pobres y los más ricos es ahora mucho más grande que antes, así varios nuevos ricos hayan salido de los estratos más pobres.

En las zonas campesinas y en las pequeñas ciudades se soporta un nivel de agresividad y violencia mayor y más directo que en las ciudades grandes. La actividad y el estilo de vida de los nuevos ricos ha reforzado algunos rasgos de la cultura regional y ha introducido otros nuevos, como resultado de lo cual también la cultura ha tendido a fragmentarse más.

Ya que ellos actúan como grupos dominantes y han dado muestra de querer ser grupos dirigentes, han reforzado rasgos como la admiración por el modo de vida norteamericano, la filantropía como forma de ayuda a los pobres, el civismo como mecanismo para el mantenimiento del orden y la tranquilidad, el deporte y el baile como símbolos de la cultura valle-caucana, etc., todo lo cual ya hacia parte del universo simbólico que movilizan las clases superiores para el ejercicio de su dominio en esta parte del país.

Como ya se ha sugerido atrás, es necesario diferenciar las actividades de algunos de estos nuevos ricos de las de otros de ellos, pues no constituyen un sector social homogéneo. La diferencia más notable tal vez sea la que distingue a quienes residen en las ciudades más grandes y han adoptado la actividad de empresarios, de quienes viven en pequeñas cabeceras municipales y han incursionado principalmente como hacendados. Los primeros son los que han tendido a reforzar los rasgos de la cultura hegemónica regional, los otros acuden más fácilmente a mecanismos extraeconómicos y extrajurídicos para ir imponiendo su dominio. Es más, posiblemente sea pertinente distinguir un sector con pretensiones de mucha alcurnia de otro más plebeyo, entre el grupo de los nuevos empresarios que habitan las ciudades más grandes, pero no hay por ahora bases firmes para hacerlo.

La fragmentación cultural que ha provocado la irrupción de los nuevos ricos se nota más si tomamos en cuenta no sólo lo que ocurre en ciudades de distinto tamaño y sus áreas de influencia, sino lo que ha sucedido en las comunidades campesinas e indígenas. Allí se ha presentado un proceso de degradación de las culturas tradicionales a pesar de las resistencias que han opuesto los miembros de dichas comunidades y, aunque no se puede decir que sea irreversible, ha provocado daños graves en varios pilares de esas tradiciones. Así, por ejemplo, la jerarquía de autoridad y el respeto por la naturaleza, en el caso de los indígenas, o la solidaridad familiar, en el caso de los campesinos minifundistas que cultivan plantas de coca, marihuana o amapola. Las crónicas y testimonios de quienes han visitado las zonas de cultivo en época de bonanza, dan cuenta del cuadro que se configura: compra de electrodomésticos donde no hay redes de energías eléctricas, adquisición de motocicletas y vehículos a gasolina para transitar por caminos de herradura que han abierto los caballos, abandono de bebidas tradicionales para ser remplazadas por cerveza enlatada o brandy, inversión en ropa fina de ciudad, prostitución, desarticulación de los núcleos familiares, aumento de los conflictos y la violencia, etc.

En el caso de los indígenas todo esto tiene el efecto adicional de hacer que continúen perdiendo su propia identidad cultural y se vean en vueltos en un proceso salvaje de mestización. La estigmatización del consumo ritual y ceremonial de la

coca que algunas comunidades han realizado desde tiempos inmemoriales, como si en el caso de ellos se tratara de un vicio idéntico al de los consumidores norteamericanos, ha conducido a que cambien su consumo por otras sustancias como el guarapo o la cerveza, producto de origen mestizo. El acoso de los grupos armados al servicio de los nuevos hacendados ha hecho pensar a algunas autoridades indígenas que sería bueno pedir armas a las fuerzas militares para conformar algo así como grupos de autodefensa, sin tener en cuenta la posibilidad de que por ese camino se profundice su proceso de aniquilamiento.

Los sectores sociales que no están directamente involucrados en el negocio del narcotráfico también tienen opiniones y actitudes divididas en torno al fenómeno, aunque puede decirse que en la región predomina una actitud permisiva frente a él, siempre y cuando la violencia que genera se mantenga en el nivel más bajo. A la gente le indigna la arbitrariedad y la injusticia que pueden cometer los narcotraficantes contra personas que no están metidas en el negocio, pero no da muestra de querer oponerse con firmeza o militancia a que los empresarios ilegales se enriquezcan con ese negocio y tampoco los asocian especialmente con la inmoralidad o la corrupción.

Los medios de comunicación reproducen fielmente los comunicados diarios o los balances periódicos que elabora la policía dando cuenta de la captura de bazuqueros, el decomiso de cocaína, dólares o insumos y la destrucción de uno que otro laboratorio; o, también, se suman a las campañas nacionales en procura de la liberación de quienes han sido secuestrados por los llamados extraditables; pero, en general son elusivos con respecto a las manifestaciones regionales del fenómeno. Prefieren autocensurarse en lugar de correr riesgos informando con transparencia sobre tópicos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades administrativas y de policía actúan al vaivén de las políticas nacionales sobre droga; pero, tal vez nunca han tenido motivos suficientes para emprender acciones de guerra abierta contra los jefes del negocio en esta región del país, ni siquiera cuando después de algunos magnicidios el gobierno nacional ha lanzado fuertes oleadas represivas contra los grupos de narcotraficantes. En los funcionarios gubernamentales de nivel intermedio, muchos de los cuales resultan amenazados de muerte por cumplir sus funciones, cuando pisan territorios de influencia de los nuevos hacendados, es palpable el escepticismo acerca de la posibilidad de superar el problema con meras acciones represivas o programas de sustitución de cultivos. La policía cumple su cuota rutinaria de operativos aunque, enfrentando directamente el problema en el terreno, algunos de sus mandos han ido tomando conciencia acerca de la conveniencia de tratar a los campesinos e indígenas productores como víctimas y no como responsables del narcotráfico, y han aprendido a distinguir narcotráfico de narcoterrorismo. Esto no impide, claro está, que algunos miembros de esta institución se vean a veces involucrados en acciones más que permisivas con quienes han llegado a convertirse en poderosos e influyentes señores de hacienda o empresa.

Finalmente, habría que señalar que las opiniones y actitudes están divididas en función de como le va a cada quien en el negocio. Así, muchas gentes del Cauca tienden a ver que los empresarios vallunos del narcotráfico utilizan su territorio para obtener materia prima y aprovechar la mano de obra barata que ellos ofrecen, pero luego se llevan toda la riqueza obtenida, no invierten en esa misma zona y dejan deteriorado el medio ambiente, por la cual critican la actitud “imperialista” de dichos empresarios. Los principales sectores de la sociedad civil valluna se muestran permisivos siempre y cuando sus miembros no se conviertan en víctimas de los negocios o los actos violentos de los narcotraficantes. Las autoridades se concentran en la tarea de mantener la paz y la tranquilidad en la región aceptando con beneplácito cualquier ayuda, sin importar mucho de donde provenga.